



CIVICUS conversa con Camila Rojas, estudiante de Administración Pública y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), la más grande del país, sobre el contexto para el activismo y las razones por las cuales las protestas se vuelven violentas y son reprimidas



P: Desde su experiencia en el movimiento estudiantil, ¿cuáles cree que son las causas de la violencia en las protestas en Chile?

Desde hace ya muchos años la sociedad chilena se ha movilizado por el derecho social a la educación, con hitos en 2006, cuando se movilizaron masivamente los estudiantes secundarios, y 2011, cuando la movilización -aún más masiva- en todos los niveles dio origen a un movimiento social por la educación pública. Este movimiento logró mantener su autonomía y evitó que sus demandas fueran procesadas en términos neoliberales, propios de las políticas públicas de la [Concertación](#), la coalición de centroizquierda que gobernó el país durante casi todo el período de la post-transición democrática. Sin embargo, durante todos estos años los gobiernos de turno fueron incapaces de responder satisfactoriamente a nuestras demandas, dado que no tuvieron la voluntad política de construir reformas en conjunto. Todo ello, en el marco de un sistema que día a día nos oprime y nos quita la soberanía sobre nuestras propias vidas al sujetar todo al devenir del mercado, contribuye a generar violencia. Esta se circunscribe a pequeños grupos de manifestantes, que sin embargo muchas veces terminan entregando material a los medios de comunicación para desvirtuar nuestras legítimas demandas, como ocurrió hace unos días en [Valparaíso](#). El enorme malestar social que resulta del predominio del modelo de Estado subsidiario acaba manifestándose en actos violentos, los cuales son potenciados por la fuerte represión de las Fuerzas Especiales de Carabineros, la policía militarizada.

En ese sentido, la represión policial sufrida en las últimas semanas está vinculada a la incapacidad del gobierno de responder a nuestras demandas. La respuesta del gobierno a nuestras movilizaciones ha sido disponer un fuerte contingente policial en las calles para evitarlas. En vez de hacer cambios para resolver el conflicto han tratado de acallarnos por la vía de no autorizar algunas de nuestras marchas. En ese sentido, la normativa que regula y gestiona el uso de los espacios públicos es deficiente. El derecho constitucional a la protesta pacífica se ve afectado por el hecho de tener que ir a pedir permiso a una oficina de la Intendencia para poder ejercerlo. El Estado tiene la potestad de autorizar o no las manifestaciones. En las manifestaciones no autorizadas se propicia un ambiente mucho más violento, ya que las Fuerzas Especiales actúan con mayor fuerza. Ante la incapacidad de buscar una salida política al conflicto, no nos autorizan las marchas, se

dispone más fuerza policial, y hasta se nos maltrata en las comisarías por el solo hecho de luchar por una mejor educación para Chile. Pero ante esta situación no podemos quedarnos de brazos cruzados, de modo que seguimos manifestándonos por cambios.

P: Más en general, ¿cómo describiría el contexto en que se mueven las organizaciones y los activistas de la sociedad civil en el país?

Nuestro país ha vivido un proceso que ha marcado a la sociedad entera, y por supuesto se ha reflejado en las organizaciones de la sociedad civil. El neoliberalismo ha calado hondo en Chile. Hemos vivido bajo un sistema que fomenta el desarrollo de los individuos por medio de la competencia entre ellos. Se ha instalado el sentido común de que la vida es un sálvese quien pueda, donde el otro es un adversario. Esto se debe a que todos los aspectos de nuestra vida están atravesados por lógicas de mercado. Ese es el contexto en que se mueven las organizaciones y los activistas de la sociedad civil: un contexto en el cual la construcción de lo colectivo es una construcción contraintuitiva.

Lo anterior va de la mano de un modelo de Estado que, a la vez que fomenta un modelo competitivo de vida, cumple roles que en el mejor de los casos son de fiscalización de la iniciativa privada, es decir, entiende su quehacer como subsidiario de la acción privada. Esto explica la fuerte proliferación, de los años 90 a la fecha, de iniciativas privadas bajo la forma de ONGs. Ellas responden a algunas necesidades públicas y compiten por fondos entregados por el Estado o por donaciones de privados. Al mismo tiempo las antiguas organizaciones sociales previas a los años 80 se han burocratizado y adquirido un fuerte componente gremial, y las juntas vecinales sobreviven como resabios del pasado. Ello ha obstaculizado la emergencia de movimientos sociales por fuera de las lógicas descritas; sin embargo, en ciertos sectores sí lograron constituirse, en algunos casos en forma incipiente y en otros con altos niveles de desarrollo. Entre estos últimos se encuentra el movimiento estudiantil, que pese a encontrar importantes obstáculos (tales como la discusión sobre becas de “gratuidad” ofrecidas recientemente por el gobierno, que lo ha llevado a abocarse a cuestiones más gremiales), ha logrado mantener amplitud social y política.

Formalmente, las libertades de asociación, expresión y protesta pacífica se encuentran medianamente reconocidas. Digo medianamente, porque hasta 2014, existían prohibiciones a las organizaciones estudiantiles de nivel superior; o, en el sector de los trabajadores, existen sistemas organizativos de las empresas que buscan evitar la sindicalización. Adicionalmente encontramos importantes dificultades sustantivas para las organizaciones sociales, como ya se ha mencionado.

También los medios de comunicación juegan un rol clave. Por medio de la estigmatización y criminalización de la protesta social, deteniéndose en las acciones de grupos minoritarios de los movimientos sociales como los encapuchados que rutinariamente enfrentan a las Fuerzas Especiales, buscan deslegitimar a los movimientos en su conjunto, y por extensión a sus reivindicaciones. Esto se ve nítidamente en los noticieros y en las portadas de los diarios, que si bien muchas veces visibilizan nuestra protesta, lo hacen por medio de imágenes que buscan deslegitimarla.

P: ¿Qué está haciendo la sociedad civil para superar esos obstáculos?

Las organizaciones ya consolidadas, como la FECh, hemos buscado fomentar la organización de distintos sectores, ya sea por medio de la formación de sindicatos, como por medio de la formación de centros de estudiantes y federaciones a lo largo de todo el

país. Este es un trabajo difícil, arduo, pero que ha dado frutos, lo que se expresa, por ejemplo, en el hecho de que hoy la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) tiene una fuerte participación de universidades privadas, cosa impensada antes de las grandes movilizaciones de 2011.

P: ¿Cuáles han sido los logros del movimiento estudiantil en Chile hasta ahora, y cuáles son los asuntos pendientes?

Es indudable que el movimiento estudiantil tiene mucho mérito en el hecho de que hoy grandes cuestiones como las reformas electoral, constitucional y tributaria (además de la educativa, claro) estén en el tapete. Ciertamente hubo partidos minoritarios, situados por fuera de las dos coaliciones gobernantes -la Concertación, de centroizquierda, en el poder entre 1990 y 2010 y nuevamente en versión remozada desde 2014; y la Coalición por el Cambio, de centroderecha, en el poder entre 2010 y 2014- que hablaron de nueva constitución, de reforma a la educación y de reforma tributaria con anterioridad a 2011, e incluso ya desde fines de los '90. La diferencia es que en 2006 y 2011 estos temas fueron puestos en la agenda a partir de fuertes movilizaciones, es decir, no ya por iniciativa de grupos minoritarios sino como expresión del descontento generalizado de una ciudadanía que exigía cambios y entendía que estos temas eran los más relevantes para conseguir esos cambios.

Lo que hicieron las movilizaciones estudiantiles fue visibilizar un descontento con el modelo social y político, exigiendo transformaciones profundas. Y a ello se vio forzada a responder – a su modo, claro - la política tradicional. Por esto, sin ser el único, el movimiento estudiantil fue uno de los principales impulsores de los cambios que se tradujeron en iniciativas de reformas como las mencionadas.

P: ¿Qué acciones concretas debería adoptar el gobierno en el corto plazo para salvaguardar el espacio democrático y asegurar los derechos de participación de la ciudadanía?

Para salvaguardar la democracia y la participación de la ciudadanía se requieren varios cambios significativos. El que más urge, en mi opinión, es una reforma de la educación que la entienda como un derecho social de todas y todos, y donde la propia ciudadanía decida sobre su educación. En otras palabras, se necesita fortalecer la educación pública sacándola del mercado y enmarcándola en una estrategia de desarrollo.

Lo que digo puede sonar forzado si la educación es entendida como una mera certificación de calificaciones para el mercado laboral, es decir, como una cuestión gremial. Sin embargo, la educación es (o debe ser) mucho más que eso. Debe ser el espacio en donde nos formamos como personas, como ciudadanos, para desenvolvemos en la vida social en virtud de nuestras capacidades y al servicio de nuestro entorno. En la medida en que tiene más de certificación que de otra cosa, sin embargo, la educación reproduce la desigualdad, formando ciudadanos de primera, segunda y tercera clases. Y justamente eso hace que nuestra sociedad sea menos democrática, afectando directamente a la participación ciudadana. De ahí que para salvaguardar el espacio democrático y la participación ciudadana sea fundamental garantizar la educación como un derecho social, y no como bien de consumo.

P: ¿Cómo pueden los actores externos –incluyendo a las organizaciones regionales y los movimientos de solidaridad internacional- apoyar a los activistas y a las organizaciones de la sociedad civil de Chile?

Una manera en que los actores externos o movimientos de solidaridad internacional apoyan nuestras causas es por medio de la difusión y visibilización de nuestras acciones e ideas. Un ejemplo de ello es lo que hace [Nodal Universidad](#), un portal de noticias universitarias de América Latina y el Caribe que brinda cobertura a los movimientos estudiantiles y difunde información sobre ellos en toda la región. Otro ejemplo es lo que hace la Comisión de Educación de la ONU, que realiza conversatorios con distintas organizaciones para hacer recomendaciones a los países a partir de la experiencia comparada. De esa manera se generan apoyos para nuestra causa en todo el mundo al mismo tiempo que se contribuye al desarrollo de movimientos similares en otros países.

Contáctese con la FECh por medio de su [sitio web](#), visite su página de [Facebook](#), o siga en Twitter a [@la_Fech](#).